ECONOMÍA / POLÍTICA

El absentismo desbocado amenaza la supervivencia de pymes y autónomos

SOS DE LAS EMPRESAS/ Los empresarios exigen recuperar el despido por bajas reiteradas, limitar complementos salariales por incapacidad temporal de los convenios colectivos y que las mutuas puedan proponer el alta de los trabajadores.

Gonzalo D. Velarde. Madrid

Alarma empresarial por la embestida del absentismo desbocado y el coste creciente para las empresas y las arcas públicas. Cada día se ausentan de su puesto de trabajo 1,6 millones de empleados (1,2 millones por procesos de incapacidad temporal) y el impacto económico no para de crecer. El año pasado ya supuso un desembolso superior a los 34.000 millones de euros entre prestaciones de Seguridad Social y la parte que abona la empresa –además de complementos salariales– y en lo que va de 2026 la factura se ha incrementado un 8,6%, anticipando una vuelta de tuerca a los costes ligados a este fenómeno.

En este contexto, las organizaciones empresariales lanzan al futuro Gobierno un *SOS* para que se aborden medidas para frenar el impacto, que es especialmente acuciante sobre los pequeños negocios llegando a comprometer su viabilidad. Cabe recordar que el 99% del tejido productivo español son pymes, muchas de ellas microempresas que cuentan con menos de cinco trabajadores (cerca del millón según las estadísticas del Ministerio de Trabajo).

"Aunque las tasas de absentismo son más altas en las empresas grandes, su impacto es más letal en las pequeñas. Muchas pymes no pueden sustituir a sus trabajadores de baja e implica comprometer su supervivencia", señala a EXPANSIÓN el presidente de la patronal de empresarios madrileños CEIM y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido.

En este punto, cabe recordar que ante la proliferación de procesos de muy larga duración los pequeños negocios asumen no solo el coste económico de la prestación económica entre los días 4 y 15 de la baja y posibles complementos salariales, sino que en ciertos casos también asumen las cargas asociadas a la necesidad de llevar a cabo una nueva contratación para poder mantener la actividad de los negocios. En este sentido, según la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo, AMAT, aunque la duración media de las bajas se mantiene relativamente estable, en 43 días en 2025 –cifra inferior a los 53,7 días registrados en 2020 con la pandemia y similar a la de hace diez años, con 42,3 días en 2015–, se ha disparado el número de procesos de muy larga duración. Concretamente, según las estadísticas, en 2019 había en España 35.000 trabajadores con procesos superiores a un año de duración. Esta cifra alcanzó el pasado ejercicio los 155.203 procesos, lo que supone que se han incrementado en un 343% en apenas seis años, más del cuádruple.

Es aquí donde saltan las alarmas ya, que a pesar de que la Airef estima que trabajar en una empresa grande incrementa un 81 % la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal respecto a una microempresa el impacto es mucho mayor en las de menor tamaño, toda vez que apenas cuentan con margen de reestructuración o músculo financiero para asumir nuevas contrataciones.

En este punto, desde la patronal están abonando el terreno legislativo de cara a la próxima legislatura con una ofensiva de propuestas para contener el impacto del absentismo.

En estos términos se enmarcan las reclamaciones realizadas ayer por la patronal CEIM durante la jornada *Absentismo laboral: una emergencia silenciosa que exige respuesta inmediata*.

Cese objetivo

Entre las exigencias más contundentes destaca la de recuperar el despido objetivo por absentismo o bajas médicas justificadas intermitentes. Esta figura jurídica, que estaba recogida en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral de 2012, permitía a las compañías extinguir el contrato de un empleado si sus faltas de asistencia –aun justificadas con parte médico– alcanzaban el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un año). Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez derogó este precepto a comienzos de 2020 al considerar que vulneraba el derecho a la salud y penalizaba a los trabajadores enfermos.

Y aunque en el pliego de propuestas la recuperación del despido es la más disruptiva, no es una posición nueva entre las organizaciones empresariales. Recientemente, Foment del Treball realizó una reivindicación en esta línea en el marco de la presentación de su *Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral* proponiendo recuperar esta figura de despido por bajas reiteradas.

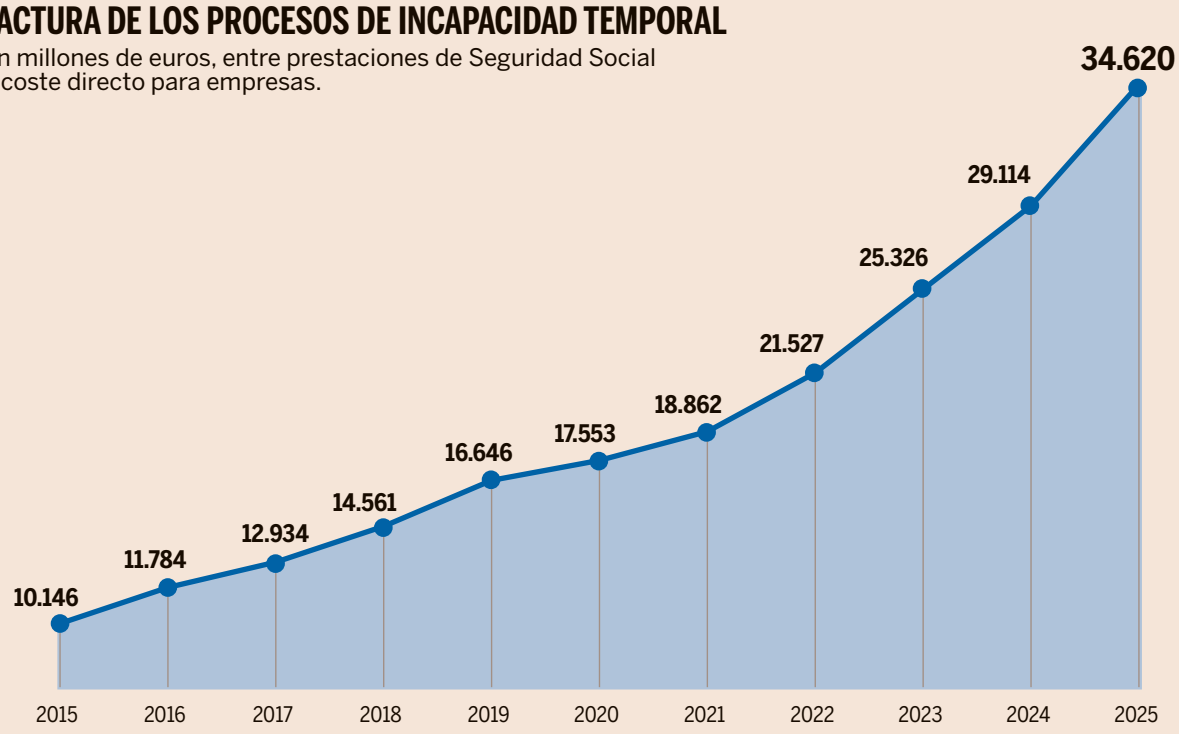
Más allá, los empresarios abogan por modular o eliminar los complementos de incapacidad temporal a cargo de la compañía (que en muchos casos cubren el 100% del salario); que sea el INSS quien asuma la cobertura económica y las cotizaciones desde el primer momento de la baja; exenciones de cuotas a la Seguridad Social para los contratos de interinidad o sustitución (evitando una duplicidad de costes) y la exoneración a partir de los 12 meses de baja continuada; y que las propuestas de alta médica emitidas por las mutuas sean de ejecución inmediata.

También reclaman estipular en los contratos de trabajo que los procesos de incapacidad suspendan el cómputo del periodo de prueba.

Editorial / Página 2

FACTURA DE LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

En millones de euros, entre prestaciones de Seguridad Social y coste directo para empresas.



Expansión

Fuente: Estimaciones realizadas por AMAT a partir de los datos de Ministerio de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

El terreno de la negociación colectiva

En marco de la lucha contra el absentismo, una de las vías principales de actuación aparece en el marco de la negociación colectiva con el repliegue o la modulación de los complementos salariales por incapacidad temporal de los convenios. Entre las opciones que ya se están aplicando, el socio responsable del Área Laboral de KPMG Abogados, Francisco Fernández Díez, expone la posibilidad de la modulación por reincidencia o duración del proceso, donde se retribuye el 100% en la primera baja médica anual, pero el complemento se reduce (por ejemplo, al 85% o 75%) en la segunda y se suprime por completo a partir del tercer episodio. En segundo lugar, en sectores muy expuestos a bajas de corta duración como la distribución, la hostelería o la limpieza, se plantea eliminar la cobertura de los tres primeros días en procesos sucesivos, limitando el pago íntegro inicial estrictamente al primer proceso del año. Una tercera fórmula traslada el control del ámbito individual al colectivo, condicionando el cobro o la cuantía de la mejora a que el índice de absentismo global no rebase determinado umbral (habitualmente un 4% o 5%). En cuarto lugar, desde KPMG explican que sectores como la consultoría y la ingeniería recurren a la redefinición de los conceptos computables, acotando el complemento únicamente al salario base o a determinados pluses fijos en vez de aplicarlo sobre el salario global, lo que reduce sensiblemente el coste para la empresa. Por último, frente a las resoluciones judiciales que declaran nula cualquier penalización directa por causas de salud, se expone como alternativa "legalmente sólida" la proporcionalidad en pluses e incentivos. De modo que el trabajador no pierde el derecho al devengo por haber estado de baja médica, sino que lo percibe a prorrata del tiempo de trabajo efectivo. "Esta vía de proporcionalidad es la mejor", explica el experto de KPMG.

Los empresarios plantean que el cómputo del periodo de prueba se suspenda durante la baja

Exigen que la Seguridad Social se haga cargo de la prestación desde el primer día

ACTUALIDAD ECONÓMICA

La mitad del empleo creado en ocho años lo ocupan extranjeros

- La última EPA de Sánchez eleva el paro por encima del 10%
- La ocupación marca récord pero el sector privado se frena

CRISTINA ALONSO MADRID

«¿Cuánto llevamos ya, presidente?», pregunta Carlos Cuerpo. «Yo creo que unos ocho», responde Pedro Sánchez en el vídeo de campaña en el que aparecen ambos corriendo por una dehesa. «¡Y a buen ritmo!», apostilla el ministro. «Como la economía y el empleo en España», remata el jefe del Ejecutivo, que anima a su número dos: «¿Qué, hacemos cuatro más?».

La continuidad o el relevo del Gobierno lo decidirán los ciudadanos en las urnas el 29 de noviembre, pero el balance de los últimos ocho años en materia económica y laboral ya puede extraerse de las estadísticas del INE. Y si algo apunta la última Encuesta de Población Activa es que ese intenso ritmo de crecimiento al que aluden Sánchez y Cuerpo, inflado por la incorporación masiva de mano de obra inmigrante, ha resultado insuficiente para cerrar la brecha de desempleo con la Unión Europea. Y llegados a este punto, empieza incluso a mostrar síntomas de agotamiento.

La primera EPA con Sánchez como presidente, del tercer trimestre de 2018, arrojó un total de 19.528.000 ocupados. La última, exactamente ocho años después, contabiliza 22.852.600, lo que supone un crecimiento de algo más de 3,3 millones de trabajadores. En términos porcentuales el empleo ha aumentado aproximadamente un 17%. En el mismo periodo la población activa, en edad y disposición de trabajar, ha pasado de 22,8 a 25,4 millones, con un avance del 11%.

En líneas generales, el balance es positivo: el empleo ha crecido más rápido que la población activa, lo que indica que el mercado de trabajo ha aumentado su capacidad parar absorber mano de obra y reducir el desempleo. En concreto, la tasa de paro ha caído desde el 14,55% hasta el 10,18%. Y lo ha hecho, además, en un contexto de crecimiento demográfico e incorporación en tromba y acelerada de trabajadores extranjeros.

Los datos oficiales atestiguan, por tanto, el récord de actividad y ocupación y la reducción de la tasa de paro. Sin embargo, ese balance preliminar y superficial que permite al presidente Sánchez presumir de la buena salud del mercado laboral esconde desequilibrios estructurales persistentes. El más evidente tiene que ver con el desempleo, y es que a pesar de la reducción de estos años, España sigue siendo el segundo país con más paro de la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 6,1%.

Además, no hay que olvidar que gran parte de la creación de empleo registrada en las dos legislaturas de Sánchez se ha debido principalmente a la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral patrio. Una creciente dependencia de la inmigración para sostener la ocupación que se evidencia en un dato: cerca de la mitad (el 48%) de los 3,3 millones de puestos de trabajo creados desde 2018 los han ocupado personas de nacionalidad no española.

Es más, el desglose del INE revela que mientras el empleo entre españoles ha crecido un 5,2% –de 16,6 millones de ocupados en el tercer trimestre de 2018 a 17,5 millones en igual periodo de 2026–, entre extranjeros el repunte ha sido de nada menos que el 72%, al pasar de 2,2 a más de 3,8 millones. Y entre los ciudadanos con doble nacionalidad –que el INE incluye entre los españoles– la ocupación se ha disparado hasta un 135%, ya que hace ocho años se registraban apenas 637.000 personas en esta categoría y hoy son casi 1,5 millones.

La tendencia se ha ido acentuando como consecuencia del proceso extraordinario de regularización puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de abril. Y es que si nos fijamos únicamente en el tercer trimestre de este año, entre julio y septiembre el número de ocupados realmente bajó en 1.800 personas entre los españoles, mientras se incrementó en 75.400 entre los extranjeros.

Y si el fuerte crecimiento reciente del empleo en España no se entiende sin la aportación de la mano de obra foránea, tampoco puede analizarse sin tener en cuenta al sector público, donde la ocupación crece a mayor ritmo que en las empresas privadas y en algunos periodos, como el trimestre pasado, también es responsable de toda la creación de empleo neta en el país. Según los datos del INE, en los meses de verano se crearon 89.900 nuevos puestos de trabajo en el sector público, en contraste con el retroceso de 16.300 ocupados en el privado. Y en el último año las administraciones cuadruplican el ritmo de creación de empleo a las empresas, con un 5,8% frente al 1,4%.

Más allá de estas tendencias, las valoraciones de la EPA de este trimestre coinciden en señalar que empiezan a vislumbrarse, sino a constatarse, ciertos signos de frenazo, aunque con distinta intensidad. Desde CCOO, que apunta a una «ligera desaceleración», hasta la CEOE, que recoge la caída de la tasa de avance anual de la ocupación del 2,3% del segundo trimestre al 2,1%, con un desplome en el sector privado que la patronal achaca al encarecimiento de los costes laborales y a la pérdida de tejido productivo, sobre todo de autónomos.

Más duros se muestran en la patronal madrileña CEIM, cuyo presidente, Miguel Garrido, acaba de renovar como vicepresidente primero de la CEOE. En un comunicado, consideran «inaceptable que España vuelva a superar el 10% de tasa de paro» y achacan el repunte a la regularización de inmigrantes. En una enmienda a la totalidad de las políticas del Gobierno de Sánchez, y en un contexto de precampaña electoral, los empresarios madrileños exigen «una reformulación completa de las políticas socio-económicas llevadas a cabo en los últimos ocho años».

FAROLILLOS ROJOS

FRENAZO. El ritmo de crecimiento del empleo se ha ido frenando, desde el 2,7% con que cerró 2025 hasta el 2,08% del tercer trimestre de 2026.

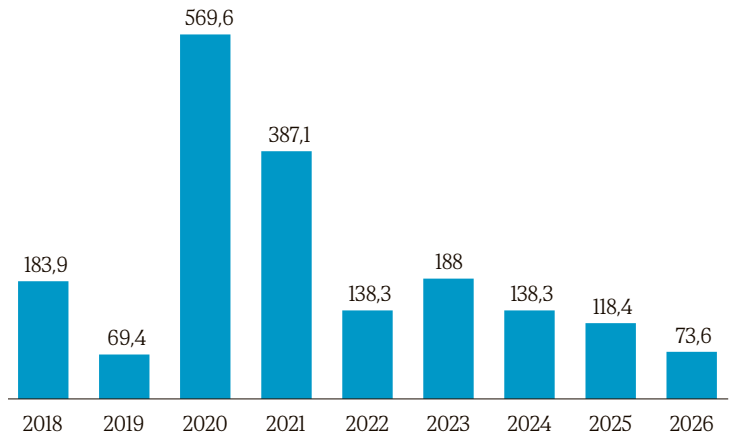
AUTÓNOMOS. Es uno de los colectivos peor parados de la EPA y del balance de la era Sánchez. Entre junio y septiembre se perdieron 15.500 autónomos y en términos interanuales la pérdida asciende a 104.700. En los últimos ocho años el colectivo ha crecido apenas un 2,6%, frente al avance del 17% en la ocupación total.

«AGOTAMIENTO». La patronal Asempleo lanza un aviso sobre el «aparente agotamiento del mercado de trabajo». Su presidente, Andreu Cruañas, lamenta que España «acumula décadas sin avances en productividad y sigue fiando su futuro laboral a cuántas personas más es capaz de incorporar al mercado». Un modelo que, avisa, «tiende a agotarse».

Evolución del empleo en la era Sánchez

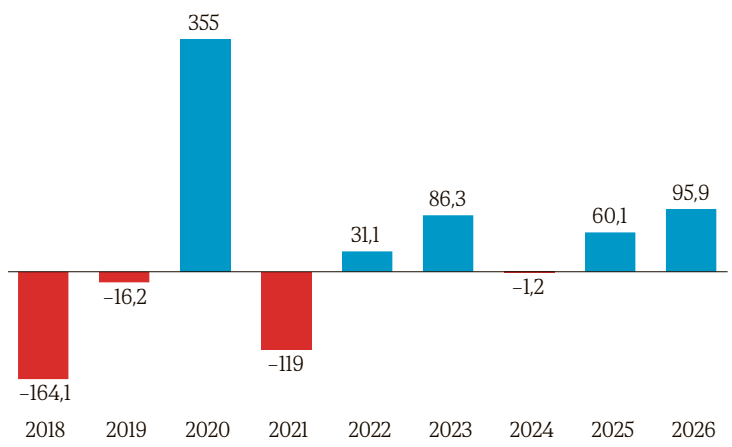
Variación de la ocupación en el tercer trimestre respecto al segundo del mismo año

En miles de personas

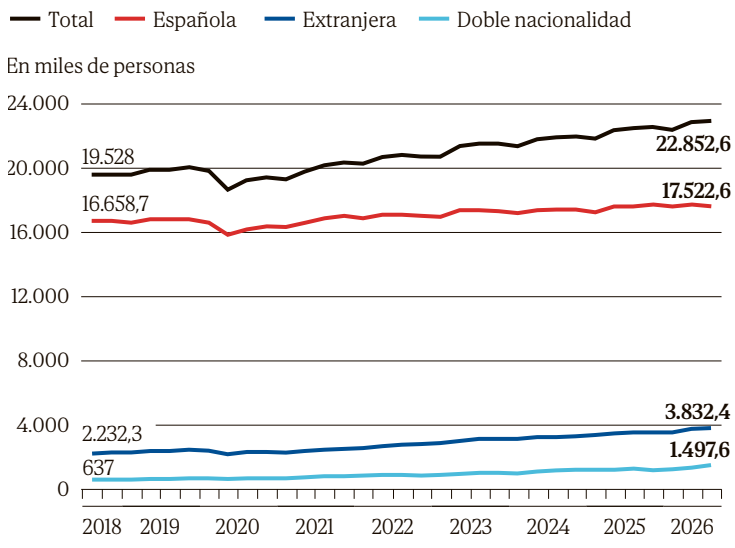


Variación del paro del tercer trimestre respecto al segundo del mismo año

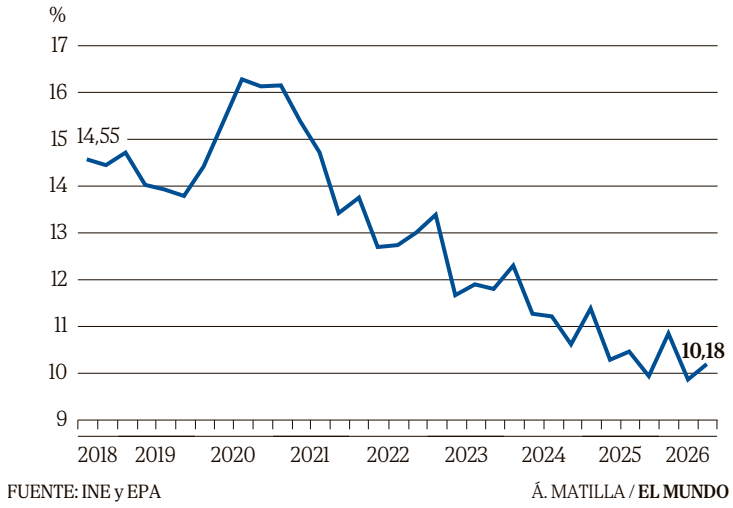
En miles de personas



Ocupados por nacionalidad



Tasas de paro



FUENTE: INE y EPA

Á. MATILLA / **EL MUNDO**

La patronal madrileña reclama recuperar el despido por acumular bajas laborales

Sigue la propuesta de Foment del Treball y pide que Seguridad Social pague la prestación

Noelia Casado MADRID.

La patronal madrileña CEIM organizó ayer una jornada destinada a hacer un diagnóstico del incremento de las bajas laborales anotado desde la pandemia y plantear soluciones a un problema que a día de hoy constituye la principal preocupación para las empresas. El presidente de la organización empresarial, Miguel Garrido, esbozó algunas de ellas entre las que ha demandado recuperar el despido por acumular bajas laborales que Yolanda Díaz derogó en el año 2020.

El líder de los empresarios madrileños ha verbalizado hoy una exigencia que ya introdujeron sus representantes en otro evento convocado por CEOE en el mes de junio, en el que otras patronales como ASPEL también señalaron en esta dirección al entender que ha sido uno de los cambios normativos que más ha contribuido a generar el problema actual. Un guante que también recogieron desde la patronal catalana Foment del Treball en el mes de septiembre, quienes exigieron que se recuperase esta posibilidad al presentar su 'Libro Blanco sobre el absentismo'.

De esta forma, las dos patronales con más peso a nivel territorial marcan el paso a CEOE a la hora de elevar el tono de sus reclamaciones a Moncloa ante el aumento de los procesos por incapacidad temporal derivados de accidentes o enfermedades que no tienen origen en el trabajo, es decir, en procesos calificados como *comunes*. El Ministerio de Seguridad Social abrió una mesa de negociación con la patronal y sindicatos sobre esta materia, en la que los empresarios se han centrado en demandar más competencias para las mutuas, en concreto, que estas puedan dar el alta.

Hasta 2020, el Estatuto de los Trabajadores recogía la posibilidad de que las empresas pudieran cesar a un trabajador de forma objetiva en el caso de que superase unos porcentajes de faltas a su puesto de trabajo, incluso si estas eran justificadas, si el índice de absentismo del centro de trabajo superaba el 5%.

> Las dos territoriales con más peso marcan el paso a CEOE para elevar sus propuestas

La primera medida adoptada por la ministra de Trabajo y Economía Social al llegar al Gobierno en 2020 (por el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos) fue eliminar este apartado 'd' del artículo 52.

El análisis de los empresarios es que la eliminación de esta posibilidad ha reducido las herramientas que tienen las empresas a la hora de encarar un problema que ya supone más de 30.000 millones de euros al año, si se suma el coste para la Seguridad Social y el reportado a las empresas. Tal y como adelantó *elEconomista.es*, desde el sector de las mutuas esperan que el coste supere este año los 20.000 millones de euros solo por la parte pública, lo que da cuenta de que el problema sigue incrementándose.



El presidente de CEIM, Miguel Garrido. ANA MORALES

Es por ello que ha sido la primera de las soluciones mencionadas por el líder de la patronal madrileño en el plano normativo, quien también ha pedido que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma el pago de la baja y de las cotizaciones desde el tercer al decimoquinto día de incapacidad, los que ahora corren a cargo de la empresa. Esta petición ya fue verbalizada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en el mes de junio, sin que hayan recibido respuesta por parte del Gobierno.

Si bien, han planteado soluciones en otros ámbitos, como el de la gestión. Los empresarios reclaman el adelanto de las pruebas diagnósticas y que se agilice la tramitación de la incapacidad permanente, ya que seis de cada diez solicitudes son denegadas y en muchos casos este trámite ha generado que el trabajador permanezca un año más sin acudir al trabajo.

> Demandan que se agilicen las pruebas diagnósticas y el tribunal de las bajas permanentes

Al mismo tiempo, también han animado a las empresas a que hagan un diagnóstico exhaustivo del estado de sus plantillas y que detallen en los contratos de trabajo las tareas del puesto, para facilitar a los médicos la decisión de si pueden seguir prestando sus servicios o no tras una baja. Asimismo, han instado a las empresas a usar los instrumentos disciplinarios que tienen.

Fedea sentencia las políticas de Díaz: más precariedad y ausencia de orientación laboral

De los 6,4 millones de contratos indefinidos firmados en 2025 el 33% fueron fijos discontinuos

Javier Esteban MADRID.

Gane quien gane las elecciones, lo que está claro es que marcarán un cambio de ciclo para la política laboral que en los últimos casi siete años ha venido marcada por la figura de Yolanda Díaz. La política gallega ultima su salto a la OIT con un legado de reformas que acaban de recibir un duro examen por parte de Fedea y EY Insights. El veredicto es rotundo: ni el tope a la temporalidad ha mejorado la estabilidad real de los puestos de trabajo ni la ambiciosa Ley de Empleo que prometía mejorar las políticas para encontrar empleo a los parados parece haber pasado de mero brindis al sol.

El informe, firmado por Judith Arnal y Ángel de la Fuente, de Fedea, y Juan Pablo Riesgo, de EY Insights, repasa las reformas educativas, laborales, de vivienda y de pensiones incluidas en el Plan de Recuperación ahora que este llega a su cierre. En el terreno laboral, las dos grandes normas impulsadas por Trabajo son la reforma de 2021 y la Ley de Empleo de 2023. Sobre la primera, el estudio concluye que ha conseguido su objetivo en la temporalidad privada, pero que la estabilidad efectiva se ha quedado "a medias". De la segunda, que mejora en alguna medida el diseño de su antecesora, pero no fija los medios necesarios para cumplir lo que garantiza.

> La Ley de Empleo del año 2023 carece de la financiación necesaria

El análisis evalúa también la temporalidad en el sector público, que la reforma laboral dejó fuera. Para reducirla se aprobó en 2021 una ley propia. Sus resultados brillan por su ausencia.

Uno de los aspectos más criticados se refiere a los fijos discontinuos. Su peso en la contratación no es menor. De los 6,44 millones de contratos indefinidos que se firmaron en 2025, 2,15 millones, el 33,4%, fueron fijos discontinuos, frente a 2,71 millones de ordinarios a jornada completa (42%) y 1,58 millones a tiempo parcial (24,6%).

Más allá de su número, lo que preocupa a Fedea es su inestabilidad. Según los datos que recoge el informe, la tasa de baja de los trabajadores con este contrato se ha duplicado desde 2022 hasta superar la de los propios temporales. Ese salto basta para doblar la rotación de todos los indefinidos, que ha pasado del 0,3% al 0,6% mensual, mientras la del conjunto de los contratos bajaba del 1,3% al 1,1%. De ahí que los autores adviertan de que el trabajo estacional sigue siendo estacional, por mucho que la relación con la empresa se prolongue entre campañas.

El otro ámbito de crítica está en la ambiciosa Ley de Empleo de 2023, que prometía reorganizar las políticas activas. El informe valora el impulso a herramientas que explotan los datos administrativos del propio sistema y la decisión de convertir la empleabilidad en el objetivo central de los servicios públicos. El problema es que la ley garantiza derechos sin fijar las plantillas ni la financiación necesaria para cumplirlos.

EMPRESAS

“El automóvil europeo no ha tirado la toalla frente a la ofensiva china”

ENTREVISTA MARKUS HAUPT Presidente de Anfac y de Seat-Cupra/ El directivo pide continuidad en las ayudas al vehículo eléctrico pese al parón de las elecciones y asegura que el automóvil “no tiene colores políticos”.

REGULACIÓN

Markus Haupt asegura que existe un **exceso de regulación** en Europa, que no está ayudando ni al cliente ni a la industria automovilística local.

Carlos Drake. Madrid

Los últimos lanzamientos de coches eléctricos por parte de los fabricantes europeos de automóviles están demostrando que sigue habiendo batalla pese al desembarco de decenas de marcas chinas en Europa. “La industria europea no ha tirado la toalla, todo lo contrario. Ha reaccionado y tiene claro que la única forma es una contraofensiva. Ahora es el momento de poner toda la carne en el asador”, asegura Markus Haupt, presidente de la patronal española de fabricantes de automóviles Anfac.

En la primera entrevista tras su nombramiento –el pasado junio–, Haupt, que también es presidente de Seat-Cupra, considera que aún hay mucho partido por disputar por parte de la industria europea de automoción ante el desembarco de las marcas chinas en Europa.

El directivo asegura que los fabricantes europeos han reaccionado ante la presión de los nuevos competidores chinos, con inversiones de cientos de miles de millones de euros en el desarrollo de una nueva generación de coches eléctricos. Sin embargo, recuerda que para que los grupos europeos sean competitivos, tanto en coches eléctricos pequeños, como medianos y grandes, se necesita un marco regulatorio que propicie una “competencia justa”.

“Una de las prioridades, sin duda, tiene que ser, conjuntamente con la Comisión Europea, crear ese marco de competitividad que permita a los fabricantes europeos ser competitivos”.



Pablo Sanz

> “La industria europea ha reaccionado a la ofensiva china. Ahora es el momento de poner toda la carne en el asador”

> “España tiene la obligación de atraer las inversiones industriales que van a hacer los nuevos players”

> “Si el cliente no compra el coche eléctrico a la velocidad esperada, no es justo que se multe a los fabricantes”

Markus Haupt, presidente de Anfac y de Seat-Cupra.

‘Made in Europe’

Haupt considera que no existe una única solución para lograr este objetivo, aunque se muestra a favor de reforzar la industria europea. Una fórmula que valora como positiva es la apuesta de Bruselas por el *made in Europe* y el contenido local de los automóviles.

En este sentido, afirma que la industria automovilística española no se puede conformar con el lugar que ocupa en la actualidad como segundo fabricante europeo de automóviles y noveno en el mundo. “Tenemos que hacer que España sea aún más atractiva de lo que ya es, teniendo en cuenta la IAA (Industrial Accelerator Act), el *made in Europe* y sabiendo que van a venir nuevos *players* que se tienen que instalar en Europa. Es nuestra obligación atraerlos para que se instalen en España”, afirma el directivo, para el que el país tiene muchas oportunidades de atraer nuevas inversiones de proyectos industriales de grupos chinos.

Haupt reclama que los nuevos actores del panorama automovilístico tengan las mismas condiciones que los grupos europeos, lo que generaría una “competencia leal, bajo igualdad de condiciones, que es lo que hay que conseguir”.

Castigo al sector

Además, se muestra partidario de flexibilizar los objetivos europeos de CO_2 ante la adopción más lenta de lo esperado del coche eléctrico. “Si el cliente no responde a la velocidad que nosotros queremos, no es justo que la industria automovilística acabe pagando multas por algo que hemos intentado”.

Haupt señala que España está atrayendo grandes inversiones de grupos chinos y espera que siga siendo así en el futuro, haciendo que la “tarjeta de visita de España” sea buena para la industria de automoción y que las inversiones lleguen, asegurando puestos de trabajo y un impacto positivo para la economía nacional. “Es nuestra obligación atraer esas inversiones”, apunta.

El presidente de Anfac señala además la importancia de que las inversiones aporten valor añadido, atrayendo todo el proceso de producción de los vehículos, no solo el ensamblaje final y que también impacte en todo el ecosistema del automóvil, incluyendo a los proveedores.

“No nos podemos conformar con lo que tenemos hoy porque estamos viendo que vienen [los fabricantes chinos]. Tienen que venir aún más y tenemos que seguir trabajando en hacer a España más atractiva”, explica.

Por eso, el directivo recibe con los brazos abiertos a las nuevas marcas que van a empezar a fabricar pronto en España y, como presidente de Anfac, lanza una invitación para que se instalen muchas más firmas.

No va de colores políticos

Ante la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Haupt confirma que lo importante es que el Gobierno que salga de dichos comicios “tenga claro” que el futuro de la industria española del automóvil pasa por ser un “proyecto de Estado”.

“Esto no va de partidos, va de industria”, asegura el también presidente de Seat-Supra, que recalca que el automóvil “no tiene colores políticos” y que lo que hay que proteger es el sector, que representa el 10% del PIB.

Por ello, se muestra a favor de dar continuidad a las medidas recogidas en el *Plan España Auto 2030*, lanzado recientemente y que incluye, entre otras iniciativas, ayudas a la compra de coches eléctricos.

Haupt, que se muestra abierto a revisar algunos objetivos del plan o a remodelarlo si lo requiere el nuevo Gobierno, defiende que los incentivos a la compra de eléctricos se mantengan en el tiempo, ya que de lo contrario se podría experimentar una desaceleración o una caída en sus ventas, que todavía están lejos de los registros de otros países de Europa, donde rondan el 35% de las matriculaciones. “No podemos tener un plan de ayudas al coche eléctrico que sea *on-off* y lo mismo pasa con la industria”.

El directivo acepta que es probable que en este período electoral en España se ralenticen algunas decisiones, aunque asegura que desde Anfac se seguirá trabajando para que el sector del automóvil siga elevando su peso sobre la economía nacional.

“Lo que no tenemos que dudar es que es necesaria una colaboración, y esta colaboración solo funciona de forma conjunta entre el Gobierno y la industria”, afirma el directivo, que destaca el trato fluido que tiene la industria con los diferentes partidos políticos.

Anfac sopesa crear un grupo de trabajo para Defensa

C.D. Madrid

El presidente de Anfac, Markus Haupt, considera “muy interesante” una posible colaboración entre los sectores de automoción y Defensa, ante las cifras a la baja de los últimos años en la producción de vehículos. “Creo que los diferentes fabricantes tienen capacidades industriales que ofrecer a otros sectores”, indica.

Por este motivo, asegura que la patronal Anfac se está planteando si interesa contar con un grupo específico de trabajo que explore lo que el automóvil puede ofrecer al sector de la Defensa.

> “Diferentes fabricantes de coches tienen capacidades industriales que ofrecer a otros sectores”



Pablo Sanz

Markus Haupt, presidente de Anfac y de Seat-Cupra.

El directivo señala que ha habido muchas reuniones entre el Gobierno central y los autonómicos con los fabricantes de coches instalados en España, ya que están interesados en atraer inversión en Defensa y ven al motor como un gran “*player*” que juegue un papel. “No explorar esta vía sería perder una oportunidad. Hay que analizar si es factible”.

EMPRESAS

Renfe encarga a Siemens su nueva flota de AVE por 1.800 millones

CONCURSO MUY REÑIDO/ El fabricante alemán supera por un escaso margen a la japonesa Hitachi para entregar 30 unidades, con opción de otros diez trenes, capaces de circular a 350 kilómetros por hora.

C. Morán. Madrid

Siemens ha esperado 25 años para vender nuevamente su tecnología de alta velocidad a Renfe. El fabricante alemán se ha impuesto en la puja para construir 30 unidades, más una opción de 10 más, con su modelo Velaro Novo (la nueva generación del modelo Velaro que circula en el corredor Madrid-Barcelona).

Se trata de su última versión de alta velocidad, todavía en fase de homologación por DB –la Renfe alemana– capaz de circular a 350 kilómetros por hora, uno de los requisitos demandados insistentemente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que formó parte de las condiciones del pliego del concurso.

La adjudicación, a un mes escaso de celebrarse las elecciones generales, forma parte del plan de ampliación y modernización de flota de Renfe, que ha descartado la oferta de la japonesa Hitachi, que había presentado una oferta con su modelo ETR 1000, el mismo que emplea Iryo para circular en alta velocidad en España.

Siemens ha tenido que ajustar su precio. Finalmente construirá y mantendrá los primeros 30 trenes por 1.218 millones de euros (incluidas las piezas de repuesto), por debajo del valor de licitación del pedido. Renfe lanzó el concurso en abril de este año

La oferta de Siemens fue mejor que la de Hitachi en precio y calidad por tan solo dos puntos

El grupo alemán se ha comprometido a unos exigentes plazos de entrega de las 30 unidades

con un precio que, con impuestos, alcanzaba los 1.650 millones de euros. El valor estimado de la licitación ascendía a 4.145 millones de euros, una cuantía que incluye todo lo que se prevé que pueda llegar a abarcar el contrato, dado que no solo incluye el pedido inicial.

En esos 4.145 millones se contemplan los costes que podrían suponer las ampliaciones del contrato, la petición de series adicionales o los mantenimientos necesarios, entre otras cuestiones.

El plazo de ejecución del contrato establecido en el pliego era de 78 meses (seis años y medio).

Según los resultados del concurso, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Siemens obtuvo mejor puntuación técnica que Hitachi por escaso margen (51,131 puntos sobre 50,790 de la japonesa).



Recreación del nuevo Velaro Novo de Siemens comprado por Renfe.

La alemana también fue la más agresiva en la parte económica al recibir 30 puntos frente a 28,991 de Hitachi. Finalmente, Siemens se impuso con una diferencia de menos de dos puntos porcentuales.

"Siemens Mobility acoge con satisfacción la decisión de Renfe de designarnos como adjudicatario propuesto para su nuevo proyecto de trenes de alta velocidad en España, con el tren Velaro Novo como solución presentada. Agradecemos la confianza depositada en Siemens Mobility para traer a España una tecnología ferroviaria de alta velocidad de primer nivel", indicaron ayer desde el fabricante germano, poniendo en valor los avances tecnológicos de su nuevo producto ferroviario que también ha vendido en Alemania, Vietnam y EEUU.

"Velaro Novo combina una reducción significativa del consumo energético con una mayor capacidad de pasajeros y menores costes a lo largo de su ciclo de vida, sobre la base de la amplia experiencia de Siemens Mobility en alta velocidad. Con casi 20 años de operación exitosa de los trenes Velaro en España, unos excelentes niveles de fiabilidad y una disponibilidad del 100%, estamos orgullosos de nuestra larga colaboración con Renfe y de contribuir a ofrecer a los pasajeros de toda España servicios ferroviarios de alta velocidad fiables. Esperamos poder formalizar próximamente el contrato", indicaron desde Siemens, proveedor de alta velocidad de Renfe junto a la francesa Alstom y la española Talgo, dos empresas que, por distintas razones, no se presentaron a este último gran concurso ferroviario español.

Los plazos de entrega en esta ocasión son muy exigentes para que no se repitan ex-

> Pasa a pág. siguiente

1.407 millones por las cercanías de Barcelona

El Gobierno de Cataluña aprobó ayer la formalización del acuerdo entre la Generalitat y Renfe Viajeros para la prestación del servicio de transporte ferroviario de viajeros de titularidad de la Generalitat durante 2026, 2027 y 2028, que prevé una inversión de 1.407 millones de euros de 2026 a 2028. Hasta ahora, Renfe operaba en Cataluña sin un contrato con la Generalitat, que es titular del servicio desde 2010, es decir, tiene la competencia para fijar horarios, frecuencias y tarifas, mientras que el Estado opera los trenes (Renfe) y gestiona la infraestructura (Adif). El documento firmado recoge la renovación de la flota con 110 trenes: 96 nuevos (72 de gran capacidad para Rodalies y 24 para Regionales) y 14 de la serie 121 procedentes de otros servicios de Renfe.



El Gobierno exime a la gigafactoría de cumplir su decreto de 'data center'

DISCRIMINACIÓN/ El Gobierno no quiere poner en riesgo el proyecto de gigafactoría de 5.000 millones en Cataluña, una baza política del PSC, y lo dispensa de cumplir las duras exigencias que impone al resto.

Ignacio del Castillo. Madrid

El Gobierno ha abierto una válvula de escape para que los proyectos que le interesen políticamente queden excluidos de las duras exigencias del decreto de centros de datos que amenaza con provocar una deserción en masa de los proyectos en curso de construcción de nuevos *data center* en el mercado español.

La nueva versión del borrador de decreto de centros de datos que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado –el último trámite antes de su aprobación en las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre– incluye un artículo que permite al Gobierno excluir centros de datos de cumplir los requisitos del decreto si su titular es una entidad del sector publico estatal que tenga la condición de operador crítico o si están adscritos a este tipo de entidades.

Fuentes del sector de la promoción de centros de datos señalan que este artículo está diseñado especialmente para aplicarse al proyecto catalán de gigafactoría de IA que el Gobierno ha decidido que se instale en Tarragona o para cualquier otro que arbitrariamente le interese.

Las exigencias del decreto, especialmente en el uso de energía renovable hora a hora –y las exigencias de eficiencia en el consumo de agua y luz– son de tan difícil cumplimiento y supondrían un aumento de costes tan elevado que su aplicación generalizada y sin excepciones podría poner en peligro el proyecto de gigafactoría prevista en Móra la Nova (Tarragona).

Tras la gigafactoría, el Gobierno se reserva la posibilidad de eximir proyectos discrecionalmente

La gigafactoría es un diseño político con impulso de Moncloa y con un 49% de capital público

Además, el decreto señala, en su disposición transitoria segunda, que quedarán exentos de sus obligaciones aquellos centros "que formen parte de iniciativas de la Unión Europea que se hayan convocado con anterioridad a la entrada de este real decreto y cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, en particular las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, o que hayan sido presentados por el Gobierno de España a una convocatoria de dichas iniciativas".

El proyecto de la gigafactoría de Tarragona contempla miles de millones de inversión –alrededor de 5.000 millones de euros– y es una baza política muy importante para el Gobierno del PSC de Salvador Illa y para los otros socios políticos catalanes que han apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez, como ERC y Junts.



Europa Press

Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica.

La candidatura española compite con más de 75 iniciativas europeas para hacerse con una de las primeras cuatro gigafactorías de IA que Bruselas espera seleccionar este año. La llamada iniciativa europea InvestAI pretende movilizar 20.000 millones de euros para impulsar esta tecnología. Los proyectos elegidos deberán estar operativos entre 2027 y 2028, con una inversión estimada de entre 3.000 millones y 5.000 millones de euros entre capital y deuda.

48% del Estado

En el caso español, la empresa que promueve la gigafactoría de IA contará con una participación del Gobierno del 47,99%, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), mientras que la Generalitat de Cataluña se quedará con un 1% del capital en la fase inicial. Los socios privados son, principalmente, Telefónica, ACS y Banco Santander que, en conjunto, tendrán un 47%. Las tres compañías contarán con un paquete accionarial a partes iguales del 15,67%, según lo establecido en los estatutos y el pacto de socios.

Spain DC, la patronal de empresas promotoras de centros de datos, indica que entre 2026 y 2030 había hasta ahora inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones en centros de datos en España. Su previsión es que, si se aplicase este decreto, incluso en su nueva versión suavizada, hasta el 90% de esas inversiones estaría en riesgo de deslocalización a otros países como Portugal o Francia.

De hecho, la patronal ya ha reconocido que proyectos por valor de 9.000 millones de euros ya han decidido abandonar España.

La Llave / Página 2

Clamor contra el nuevo borrador de real decreto

"Vamos a utilizar todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance" para lograr que el decreto no tenga efectividad, señaló ayer Emilio Díaz, presidente de SpainDC, la patronal de los centros de datos. Según Díaz, esta norma "es capaz de alterar inversiones ya comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España" a peor. La patronal rechaza el nuevo texto del decreto remitido al Consejo de Estado al considerar que conserva las principales exigencias que hicieron inviable el proyecto inicial y añade nuevos riesgos. Lejos de significar una relajación de exigencias, SpainDC cree muy grave que se abra la puerta a que el operador del sistema pueda provocar un apagón desconectando a los centros cuando quiera y sin indemnización.

Macroemisión de bonos de Iberdrola en Estados Unidos

Miguel Á. Patiño. Madrid

Iberdrola comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha lanzado una emisión de bonos verdes por un importe principal agregado de 1.600 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros). Aunque va dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos, es sobre todo en este país donde ha recaudado los recursos financieros.

En plena incertidumbre

Iberdrola mantiene así su apuesta por EEUU a pesar de la incertidumbre política que se cierne sobre este país en plena campaña por las próximas elecciones. Y a pesar de la poca simpatía de Donald Trump, su actual presidente, por los proyectos de eólica marina, una de las bazas de negocio de Iberdrola.

La macroemisión se realiza en dos tramos. Iberdrola ha explicado que esta emisión se ha cubierto con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, más de tres veces el importe final, en la que han participado 116 inversores, entre los que se encuentran muchas de las principales instituciones financieras.

La energética añade que dicha emisión es la primera operación directa en Estados Unidos por parte de Iberdrola desde 2009 y que abre una nueva vía de financiación para la compañía en un mercado en el que vienen manteniendo una intensa actividad sus filiales americanas, encabezadas por Avangrid.

La emisión está estructurada en dos tramos, el primero asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2029, con un cupón fijo del 5,4% anual, habiéndose determinado el precio de emisión en el 99,92% de su valor nominal.

El segundo tramo de los bonos asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo del 5,85% anual, habiéndose determinado el precio de emisión en el 99,994% de su valor nominal.

Financiación verde

El importe irá a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles de conformidad con los criterios establecidos en el "Marco de Iberdrola para la Financiación Verde".

Esta operación, según explica la compañía, permite a Iberdrola ampliar y diversificar sus fuentes de financiación y contribuye a mejorar progresivamente sus costes financieros, tanto en el mercado estadounidense como en el euromercado.

Igual que en Europa

Asimismo, Iberdrola señala que, en términos relativos, el coste final ha sido comparable al que la energética española podría haber obtenido en el euromercado, lo que refleja "el buen momento elegido para ejecutar la transacción", según detalla la empresa.

Vuelve la apuesta por EEUU

- **Los bonos, en dólares y en EEUU, son una forma de diversificar financiación y una demostración de la apuesta por ese país.**
- **Desde 2009 Iberdrola no realizaba emisiones de bonos en dólares en Estados Unidos de forma directa.**

Francia hace el 'trabajo sucio' al BCE y da margen a Lagarde para mantener los tipos

La crisis de deuda gala es la cobertura perfecta para retrasar un alza hasta diciembre

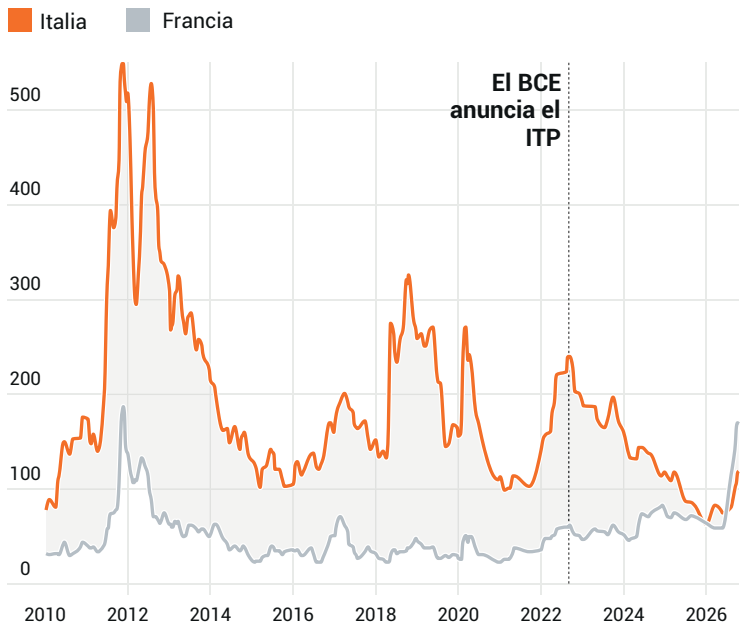
Vicente Nieves MADRID.

La teoría dice que los bancos centrales son los encargados de subir o bajar la temperatura de la economía a través del precio del dinero, es decir, de los tipos de interés. Sin embargo, el mercado está demostrando en Europa que puede llegar a ser mucho más rápido y expeditivo que los propios guardianes del euro. Este jueves, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reúne en Frankfurt con la inflación repuntando y la energía bajo máxima tensión. En condiciones normales, el manual exigiría un nuevo *zarpazo* monetario. Pero esta vez no ocurrirá. El mercado (guiado por la crisis fiscal de Francia) ya ha subido los tipos haciendo el trabajo *sucio* del BCE a través de tres canales diferentes (tipos más altos, endurecimiento de las condiciones financieras y deterioro de las expectativas económicas) que reman en la dirección adecuada para contener la inflación. La crisis silenciosa de la deuda soberana de Francia ha provocado un endurecimiento severo de las condiciones financieras de la región que ha hecho, de facto, el trabajo del BCE, dándole la cobertura perfecta para decretar una pausa táctica hasta diciembre.

En lo que va de 2026, la institución presidida por Christine Lagarde ha acometido dos subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos cada una, ejecutadas en sus reuniones de junio y septiembre. Tras el último incremento, la tasa de referencia clave se sitúa en el 2,50%.

Francia le hace el trabajo sucio al BCE

Prima de riesgo de Francia e Italia (comparación con el bono alemán), prima de riesgo en puntos básicos



Fuente: JP Morgan. eE

> El organismo ya ha subido el precio del dinero en dos ocasiones este año, hasta el 2,50%

El motivo por el que el BCE mantiene la guardia alta es una inflación que se resiste a volver al redil del 2%. Espoleada por el encarecimiento de la energía y los problemas de suministro global derivados del conflicto en Oriente Medio y Ucrania, la inflación de la eurozona escaló en septiembre hasta el 3,8% interanual, marcando máximos de tres años. Sin embargo, a pesar de este preocupante repunte de los precios y de que la tasa de referencia está claramente por debajo de la de inflación, los analistas coinciden en que este jueves el BCE no moverá ficha. La explicación no está en los despachos de la Eurotorre, sino en el castigo que los inversores están propinando a la deuda francesa y su leve contagio al resto del mercado.

La crisis presupuestaria y la inestabilidad política que arrastra Francia han provocado un desplome histórico en el precio de sus bonos soberanos, disparando sus rentabilidades. El rendimiento del bono francés a 10 años llegó a rebasar la cota del 5,10%, superando por primera vez en quince años la tasa del bono de EEUU al mismo plazo y provocando que la prima de riesgo de Francia se disparase hasta los 170 puntos básicos la semana pasada.

Los bancos utilizan los bonos soberanos como una referencia fundamental para determinar el precio del crédito (además, la caída del precio de los bonos impacta en el balance de la banca de forma negativa) y, cuando las rentabilidades se disparan, las empresas y las familias terminan enfrentándose a unas condiciones de financiación más exigentes. El resultado es muy parecido al que persigue el BCE cuando sube los tipos de interés: se encarecen las hipotecas, se frenan las inversiones empresariales y se debilita el consumo.

> La crisis soberana amenaza con restringir el crédito a hogares y empresas

WisdomTree logra 6.460 millones de euros en flujos netos

Es el mejor dato de la gestora norteamericana en Europa hasta ahora

Á. Alonso MADRID.

La gestora norteamericana WisdomTree está consiguiendo su mejor cifra de captaciones netas desde que comenzó a operar en Europa en el año 2014. Con datos hasta octubre, ha logrado atraer 6.460 millones de euros en flujos netos, lo que ha incrementado su volumen patrimonial hasta los 58.620 millones, algo más de un tercio de los 152.620 millones que maneja globalmente.

Se mantiene de esta manera como el octavo proveedor de ETF en el Viejo Continente, donde es una de las firmas líderes en fondos cotizados temáticos, con 8.530 millones de euros bajo gestión. Un segmento en el que están siendo especialmente activa este año, con el lanzamiento de varios productos relacionados con la infraestructura europea, los mercados emergentes, megatendencias tecnológicas y los de rendimiento definido, como el *WisdomTree Defined Return Autocallable Ucits ETF*.

Este fondo es el segundo de este tipo que ha registrado este año y espera ofrecer otros dos productos de este tipo antes de que acabe el ejercicio, después de haber comprado la firma especializada Atlantic House, que cuenta con casi 3.600 millones de euros en ETF de renta definida o *autocallable strategies*.

La cotización de Abenójar Tungsten baja un 10% en las primeras operaciones antes del debut oficial

Arranca con caídas en la "cotización condicional" previa a la salida a bolsa prevista para este viernes

I. Blanco MADRID.

La minera española Abenójar Tungsten arranca su andadura bursátil en el parqué de Londres. La compañía tiene previsto su debut oficial el próximo viernes, 30 de octubre, pero este martes comenzaron a intercambiarse títulos en la llamada "cotización condicional", que permite la negociación previa a la salida aceptando que si la colocación finalmente no se produce las operaciones se anularían. Al cierre de la sesión el precio de las acciones cedió un 10%, hasta las 99 libras, según la London Stock Exchange.

La compañía fijó ayer un precio de partida de 110 peniques por acción, el más bajo de la horquilla que había establecido. Este punto de arranque suponía una capitalización bursátil para Abenójar Tungsten de aproximadamente 522,2 millones de libras esterlinas (624 millones de euros) al inicio de las operaciones condicionadas.

La empresa explica que "los inversores deben tener en cuenta que solo aquellos que solicitaron y obtuvieron acciones en la oferta podrán negociar con ellas de forma condicional", añadiendo que los inversores minoristas deben consultar con su intermediario para confirmar si este puede facilitar su participación en la negociación condicional".

> El precio se fija en la parte baja de la horquilla y captará unos 170 millones de euros

La colocación iba dirigida a institucionales, pero también incluía un tramo minorista. En total, con la salida a bolsa la firma recaudará aproximadamente 142,5 millones de libras esterlinas en ingresos brutos (unos 170 millones de euros). En un comunicado, la empresa señala que para facilitar la participación en la oferta y la suscripción de acciones ofrecidas por determinadas personas en España, se realizarán suscripciones directas por valor de 34,6 millones de euros en acciones a un precio de 110 peniques por acción, cuyo número final de acciones se determinará utilizando el tipo de cambio aplicable a las 16:00 (hora de Londres) del 28 de octubre de 2026. El capital total estará formado por 474.761.835 de acciones.

"Hoy marca otro hito importante para Abenójar Tungsten, ya que completamos con éxito nuestra salida a bolsa y nos preparamos para comenzar a cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres. Los fondos obtenidos con la salida a bolsa nos proporcionan el capital necesario para seguir impulsando el desarrollo de El Moto hasta alcanzar nuestro objetivo de iniciar la producción en 2029. Con la construcción ya en marcha y un equipo experimentado, ahora nos centramos por completo en la ejecución", comentó Gonzalo García San Miguel, director general de Abenójar Tungsten en el comunicado.

La compañía ya había desgranado que los fondos irían para la mina de wolframio y oro El Moto, ubicada en Ciudad Real, que ha sido declarada por la Comisión Europea como uno de los 47 proyectos estratégicos destinados a garantizar el suministro de materias primas críticas esenciales para la industria y la tecnología del continente.